PROPUESTA DE RESOLUCIÓN por la que se autoriza un Programa Concreto de Actuación para la Presidencia de la Audiencia Provincial de Asturias

PROPUESTA DE RESOLUCION

En el expediente de referencia resulta,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Viceconsejería de Justicia se ha recibido solicitud del Presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, poniendo de manifiesto la situación de la oficina de Presidencia, con más de 158 expedientes gubernativos tramitados en lo que va de año y la precaria situación de la plantilla (dos puestos de personal funcionario) en la que se suceden bajas prolongadas con nombramiento de personal interino de manera sucesiva, sin poder contar con personal estable y de confianza para tramitar los asuntos que le corresponde.

Precisando de personal cualificado con conocimientos informáticos y de índole gubernativa y con conocimiento de los distintos órganos relacionados con la Presidencia.

Situación que se agrava cuando el único funcionario actualmente en activo disfruta de permisos por vacaciones o licencias, quedando la Presidencia sin personal con conocimiento suficiente para atender las necesidades relacionadas.

Segundo.- Atendiendo a estas razones, resulta necesario poner en marcha actuaciones que ayuden a paliar la situación, entre las que se encuentra el establecimiento de un Programa Concreto de Actuación para el cumplimiento de objetivos, previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 516 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en referencia a las retribuciones de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, establece que pueden ser básicas o complementarias y, estas últimas, pueden ser fijas o variables.

Entre las retribuciones variables, se encuentra la participación en los programas concretos de actuación y en la consecución de los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos.

Segundo.- Los programas concretos de actuación se encuentran regulados en el artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, por el que se fija el complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses, Técnicos Facultativos del Instituto de Toxicología, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, Técnicos Especialistas, Auxiliares de Laboratorio del Instituto de Toxicología y Agentes de Laboratorio a extinguir del Instituto de Toxicología.

De este modo, los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia podrán percibir hasta un máximo de 16 puntos mensuales por el cumplimiento de objetivos establecidos en los programas concretos de actuación que se determinen por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en sus respectivos territorios.

Así mismo, el citado Real Decreto establece que los objetivos y la concreción de las cuantías individuales, así como los funcionarios con derecho a su percepción incluidos en los programas, serán aprobados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia u órgano competente de las Comunidades Autónomas, y su acreditación en nómina exigirá certificación mensual del titular del órgano judicial o Secretario; y que el Ministerio de Justicia y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, con respecto al personal sobre el que han asumido competencias, tendrán la facultad de suspender la acreditación del complemento si no se cumplen los objetivos establecidos.

Tercero.- Mediante Real Decreto 2003/2003, de 5 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de las funciones y servicios de la Administración General del Estado en materia de provisión de medios personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, se traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias las funciones y servicios que, en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma, desempeña la Administración General del Estado para la provisión de los medios personales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, incluidos los Juzgados de Paz.

En particular, estas funciones comprenden, entre otras, las siguientes actividades:

a) La gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia en los términos establecidos en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la

Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y demás disposiciones aplicables.

Cuarto.- El Decreto 74/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos establece que corresponde a la Viceconsejería de Justicia asumir las funciones que competen al Principado de Asturias en materia de justicia, en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Quinto.- La Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos de la Consejería, delega en la persona titular de la Viceconsejería de Justicia el ejercicio, entre otras, de las siguientes competencias: El reconocimiento de derechos de naturaleza económica del personal al servicio de la Administración de Justicia no atribuidos a otros órganos, así como los actos de gestión ordinaria, respecto al personal perteneciente a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho aplicables, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas, llevada a cabo mediante reunión de xxxxxx, oído el Consejo General del Poder Judicial, y dentro de las cantidades asignadas presupuestariamente

SE PROPONE

Primero.- Aprobar un programa concreto de actuación para la Presidencia de la Audiencia Provincial de Asturias, para la mejora del funcionamiento de la oficina de la Presidencia.

Segundo.- El objetivo de este programa concreto de actuación consistirá en la atención y tramitación de los asuntos gubernativos que le sean encomendados por la Presidencia, para lo que se requerirá el manejo de las aplicaciones informáticas que procedan y el conocimiento de los órganos con los que la Presidencia de la Audiencia Provincial tiene relación.

Tercero.- Los objetivos encomendados se llevarán a cabo, según propuesta del Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial, por la funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, Doña María García Paje, con DNI 71668448B, destinada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y que voluntariamente accede a participar en el Plan Concreto de Actuación mediante la prolongación de su jornada habitual de trabajo hasta, como mínimo, 40 horas semanales, sin menoscabo de sus obligaciones en su actual destino.

Cuarto.- Por la participación en el Programa se abonarán mensualmente 16 puntos, si ha cumplido con el objetivo acordado. En caso de no alcanzar este objetivo, se le abonarán los puntos que proporcionalmente le correspondan en función de los objetivos alcanzados.

El valor económico de cada punto, se establece en 31,55 euros para el ejercicio 2025, lo que supone un importe máximo mensual por la participación en el Programa de 504,80 euros. Esta cuantía deberá ser actualizada para el año 2025 en función del incremento retributivo aprobado para los empleados públicos del Principado de Asturias para el citado ejercicio.

Para su acreditación en nómina se exigirá certificación mensual de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial referido a la participación del personal funcionario adherido en la consecución de los objetivos propuestos, sin perjuicio de los mecanismos de verificación que se puedan utilizar por la Viceconsejería de Justicia.

El devengo de estas cantidades durante la vigencia del Plan no originará derecho alguno a su mantenimiento durante periodos sucesivos, ni podrá ser consolidado en las retribuciones de carácter complementario establecidas en las relaciones de puestos de trabajo que, en su caso, se aprueben para la ordenación del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Quinto.- El Programa se establece para el periodo del 21 de julio al 31 de diciembre de 2025, con una duración de 5 meses y 19 días.

Séptimo.- El coste económico del Programa asciende a un total de xxxxxxxx euros que se imputarán a la aplicación presupuestaria 12-06-141B-152.020